

Pablo Trucco/Diana Tussie

La gran recesión y el retorno de la política en América del Sur

Nada quedó de los felices noventa. El pujante crecimiento del consumo global que siguió al final de la Guerra Fría hasta bien entrada la primera década del siglo XXI se evaporó ante la inesperada implosión del capitalismo liberal en el corazón mismo del mundo industrial. La onda expansiva del quiebre sistémico se propagó de forma arrolladora castigando a los más robustos mercados, los más sólidos sistemas políticos y hasta a los más soberbios paradigmas ideológicos. El tiempo de esplendor y vanagloria se escurría entre los dedos de Occidente. Despojados de su acostumbrada opulencia, endeudados y vulnerable, el mundo occidental ha sufrido pérdidas que van más allá de los males directos y evidentes. Se ha dañado su aura civilizatoria de progreso ilimitado propugnada sin tapujos en las aulas de las universidades y en las oficinas públicas y privadas, ampliamente difundida a través de los medios masivos de comunicación social y patrocinada por los organismos multilaterales de crédito. Otra vez, como en los años treinta, la mano invisible de capitalistas ávidos por aprovechar el desarrollo de un mundo financiero pobremente regulado –y crecientemente divergente de la economía real– dejaba al mundo al borde de una oscura y larga noche.

Esta vez, sin embargo, la historia sería diferente en América Latina. Habiendo padecido la inclemencia neoliberal años antes que el mundo industrial, millones de latinoamericanos desencantados con “el modelo” –sintetizado por John Williamson¹

en diez mandamientos que las rezagadas naciones latinoamericanas debían cumplir para alcanzar la tierra prometida del desarrollo– votaron por un cambio, catapultando al poder a líderes de izquierda y centroizquierda en varios países de la región. La sintonía política entre vecinos progresistas que, con importantes matices, comparten una serie de criterios básicos referentes a la organización económica y social, tales como una mayor intervención del Estado, una redistribución más equitativa del ingreso, el celo riguroso por mantener niveles de desempleo en tasas socialmente tolerables y la necesidad de una mayor integración regional, entre otras, ha confluído con años de términos de intercambio favorables para los productos de exportación sudamericanos. Esta concurrencia de escenarios políticos y económicos ha permitido que América Latina pudiera adoptar una estrategia para afrontar la crisis internacional que difiere sustancialmente de aquélla adoptada en otras latitudes, manteniendo en el tiempo políticas contracíclicas e impulsando acuerdos regionales que apuntan a consolidar su posición frente a *shocks* externos emanados de la gran recesión.

Este ensayo se enfoca sobre dicha estrategia, poniendo el *zoom* sobre el caso de América del Sur. La segunda sección presenta un panorama de la crisis internacional y las respuestas ofrecidas desde distintas partes del globo. La tercera sección profundiza sobre la importancia de la política en la estrategia elegida por América del Sur para afrontar la crisis internacional y el efecto que ello ha tenido sobre el regionalismo sudamericano, mientras que en la cuarta sección se pone el foco sobre cómo se pretende instrumentalizar esa estrategia a través de la construcción de una arquitectura monetaria y financiera regional que resguarde a la región de los efectos de la crisis global. Por último, se presentan algunas reflexiones finales.

¹ John Williamson: *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?* Washington: IIE, 1990, pp. 7-20.

Respuestas desiguales ante la misma crisis

Nacida como un fenómeno sistémico, la gran recesión ha mostrado distintos rostros a cada rincón del globo. Vano fue el intento de oponerle una respuesta articulada entre las principales economías del planeta, congregadas en el Grupo de los 20 (G20). El singular impacto que la crisis económica internacional tuvo en los distintos continentes y al interior de cada uno de ellos, así como las particulares circunstancias en el frente de la política interna en cada nación, derivaron en acciones diferentes para afrontar los desiguales efectos de la misma crisis.

Las cumbres del G20 en Pittsburg y Londres prometían políticas fiscales expansivas orientadas a apuntalar la demanda global. Ello implicaba una mayor presencia del Estado a través de un incremento en el gasto público y de intervenciones y regulaciones sobre el mercado. Implícitamente, esta política exigía contar con recursos para llevar a cabo grandes desembolsos que, tal como a poco de andar quedaría en evidencia, no todos estaban en condiciones de afrontar. Así, con apenas tímidas señales de recuperación económica comenzaron a aventurarse las primeras “estrategias de salida” en naciones que, en la historia reciente, se habían contado entre los miembros del exclusivo club de países ricos, directores de la economía mundial.

En efecto, limitaciones presupuestarias en Europa junto con el afloramiento de graves inconsistencias en la arquitectura financiera y monetaria de la Unión Europea llevaron al viejo continente a desertar de su inicial estrategia contracíclica. Por el contrario, y a expensas de graves conflictos políticos nacionales y regionales, los europeos se embarcaron en un proceso de agudo ajuste estructural, resca-

te de países en crisis y profunda reorganización institucional. Alemania, único país de la Unión en condiciones de inyectar recursos económicos en la dimensión necesaria para revertir el cuadro anémico de la economía europea se vio empujada a un liderazgo indeseado y, en consecuencia, un liderazgo reticente a postergar sus intereses nacionales inmediatos en favor del bienestar de sus vecinos. Irónicamente, la mezquindad de la primera economía europea, tanto al optar por el castigo a los “países indisciplinados” como así también al haber apelado a la ortodoxia económica –soltándole la mano a la temerosa recuperación que se vislumbraba en 2009– tendría un altísimo costo, dado que se vio traducida en una peligrosa espiral de crisis fiscales que avanzó desde la periferia europea hasta el corazón mismo de la economía de la Unión, alcanzando a varios países del célebre Grupo de los Siete que, desde 1977, se reunía anualmente a nivel presidencial para establecer las pautas tanto económicas como políticas a nivel global.

Estados Unidos, por su parte, optó en un principio por una estrategia moderadamente expansiva con fuerte intervención estatal para el rescate masivo de firmas productivas y financieras en problemas. El renacido ímpetu del Estado interventor resultó, una vez más, fugaz. Pronto emergieron condicionantes políticos internos desde el ala más radicalizada del Partido Republicano que impusieron fuertes restricciones a la política fiscal, dejando manca a la principal economía del mundo con la política monetaria como único instrumento para estimular la alicaída demanda estadounidense. En este sentido, cabe resaltar que la política monetaria es un poderoso instrumento cuando el objetivo es limitar o aminorar el ritmo de crecimiento económico (política restrictiva), pero su eficacia como instrumento expan-

sivo resulta más controversial, sobre todo si las tasas de interés permanecen en niveles que rozan el cero. Posiblemente, el impacto más significativo de la política monetaria implementada por Estados Unidos ha tenido lugar a través de una depreciación en el valor del dólar, mejorando la competitividad estadounidense a expensas de sus competidores.

Así, restricciones económicas y limitaciones políticas despojaron al mundo de una colaboración comprometida de dos importantísimos jugadores del sistema internacional en el esfuerzo para superar la crisis global: La Unión Europea y los Estados Unidos, ambos acorralados en sus respectivos frentes internos.

En contraste con la endeble situación económica y política en el mundo industrializado, los países del sur mostraron una notable pericia para enfrentar la crisis. En efecto, el inicial contagio de la crisis hacia los mercados emergentes —fundamentalmente entre septiembre de 2008 y enero de 2009— dio paso a una rápida recuperación en los países del sur en contrapunto con las economías más avanzadas del norte, alimentando el debate sobre un creciente desacople entre las economías en desarrollo y las antiguas locomotoras de Occidente.

El sur global adoptó, asimismo, estrategias diferentes. Asia continuó su expansión económica basada en las exportaciones y, en menor medida, en la demanda interna impulsada por paquetes de estímulo fiscal, liderando una recuperación económica mundial a distintas velocidades. Por su parte, América del Sur logró capear la crisis recurriendo a políticas de estímulo de la demanda interna y usufructuando la posición favorable que venía disfrutando a raíz de los altos precios de sus productos de exportación y de los superávits de cuenta corriente acumulados desde el inicio de la década de 2000. De hecho, ello

se vio traducido en una paulatina pero sustantiva acumulación de reservas internacionales.

Ante la incertidumbre generada por la crisis global y en vista de la falta de compromiso de las economías avanzadas con una estrategia articulada que tuviera en consideración los intereses y preocupaciones de los socios menores, y reconociendo el uso político que frecuentemente los países centrales han hecho de la estructura de organismos internacionales, las naciones sudamericanas comprendieron que para salir airosos de esta tormenta debían cubrirse sus propias espaldas. En esta ocasión las crudas lecciones de la historia sudamericana coincidieron con una situación en la que el subcontinente cuenta con suficiente espalda económica para determinar su propia estrategia —al menos en el mediano plazo— para sobrellevar la crisis.

Cubrirse las espaldas no implicaría un aislamiento del sistema económico internacional, sino simplemente una reducción en la exposición de las economías de la región a los vaivenes financieros provenientes de actores extrarregionales. En particular, los gobiernos sudamericanos estarían apuntando a utilizar los recursos financieros amasados durante la década de 2000 para crear una red de contención frente a posibles *shocks* derivados de la crisis económica internacional que pudieran desembocar en un estrangulamiento en su balanza de pagos. Así, buscarían afrontar de manera coordinada y concertada eventuales cambios abruptos en los términos de intercambio, ataques especulativos sobre las monedas sudamericanas o restricciones de financiamiento por parte de los mercados voluntarios de deuda o de organismos multilaterales de crédito, que pudieran afectar sensiblemente el comercio intrarregional, los pagos internacionales, o pusieran en riesgo el financiamiento para programas nacionales o regionales de

desarrollo. Con esto en mente, los líderes sudamericanos se han propuesto llevar adelante la construcción de un sistema monetario y financiero regional que permita apuntalar la estabilidad y mantener al subcontinente sobre un sendero de desarrollo sostenido.

La política: dimensión distintiva de la estrategia regional sudamericana

El factor de quiebre fundamental que terminó dividiendo las aguas entre América del Sur y los países avanzados en relación a la estrategia elegida para afrontar la crisis fue la primacía que los sudamericanos confirieron a las decisiones de los políticos en detrimento de las recetas propugnadas por los técnicos económicos devotos de la escuela neoclásica. El renovado ímpetu de la política para dirigir la organización de la sociedad a expensas del libre mercado es una consecuencia natural de las duras lecciones aprendidas de una larga tradición de ajustes económicos de corte neoliberal en varios países de la región que finalizaron en estrepitosos fracasos con elevados costos sociales. La restauración de la política ocurrió casi paralelamente a un proceso de desendeudamiento del FMI, paso obligado para contar con margen de maniobra.

Así, la crisis internacional otorgó el impulso final al proceso de repolitización sudamericano que venía gestándose desde el comienzo de la década de 2000 y apuntaló el ingreso del regionalismo de América del Sur en su tercera fase, caracterizada por la recuperación por parte del Estado del protagonismo y la primacía como actor motorizador del proceso de integración regional. En efecto, la primera fase del regionalismo se había extendido desde mediados de la década de 1980 hasta principios de la década de 1990 y había estado

marcada por una fuerte impronta estatal, mientras que durante la segunda fase, que abarcó desde principios de la década de 1990 hasta principios de la década de 2000, el actor dinamizador de la integración regional había sido el sector de grandes empresas con interés en expandir sus cadenas de valor a nivel regional, tanto en los servicios como en la producción.

La crisis internacional resultó funcional a la consolidación de un rol del estado fortalecido en la mayoría de los países de la región y, simultáneamente, contribuyó con la construcción de un modo de relacionamiento más cooperativo entre los Estados sudamericanos en varios frentes, incluyendo la búsqueda deliberada de mayor autonomía para el subcontinente en el escenario global. Sin embargo, se trataba de un proceso regional iniciado con anterioridad al estallido de la crisis económica internacional. La primera fase del desarrollo del regionalismo sudamericano había tenido lugar en el contexto de la oleada democratizadora de la década de 1980 en América Latina. El mayor logro de esa primera fase consistió en la construcción de confianza mutua entre vecinos y en la progresiva desactivación de hipótesis de conflicto, condición necesaria para el desarrollo del regionalismo. Asimismo, el crecimiento de la confianza entre vecinos erosionó la importancia del actor militar en el frente interno, reforzando indirectamente los procesos democráticos. A ello se sumó la utilización de acuerdos de integración regional para amarrar los incipientes procesos de apertura de principios de la década de 1990 y dotarlos de mayor credibilidad ante los mercados internacionales.

De este modo, a medida que avanzaba la década de 1990 y se consolidaban las reformas liberalizadoras, el Estado fue cediendo protagonismo en favor del empresariado como actor de mayor dinamismo en la integración regional, en una

primera etapa (hasta finales de la década de 1990) a través del comercio y, posteriormente, a través de los flujos de inversión entre países de la región. De este proceso emergieron las llamadas empresas translatinas, los nuevos inversores provenientes de la región con creciente interés en expandirse más allá de las fronteras nacionales.

Sin embargo, el fracaso de las políticas económicas de corte neoclásico en cumplir con su promesa de conducir a la región hacia un rápido desarrollo se tradujo en un hondo desencanto en la población de los países sudamericanos que se vio reflejado hacia el amanecer de la década de 2000 en la llegada al gobierno de sectores de izquierda y centro-izquierda en la mayor parte de los países de la región. Considerada por sectores conservadores del *establishment* nacional e internacional como una ola de populismo radical², la llegada al poder de gobiernos progresistas fue interpretada por otros como democracia desde abajo, “una genuina reacción desde las bases sociales contra los efectos negativos de las políticas neoliberales, la guerra contra las drogas, la intensificación del ajuste y el empobrecimiento de millones de latinoamericanos, que tuvo lugar simultáneamente con una creciente concentración de la riqueza y el ingreso, corrupción y cinismo en la política dentro del hemisferio” (Loveman, *Adictos al Fracaso. Políticas de Seguridad de Estados Unidos en América Latina y la Región Andina*, 2010, LOM pp.89). Los nuevos gobiernos revirtieron la delegación de funciones estatales al sector privado que había tenido lugar durante la década de 1990 y recuperaron el protagonismo del

estado en varios ámbitos de la organización social, incluyendo la construcción del regionalismo.

Paradójicamente, el renovado vigor del regionalismo sudamericano resulta cada vez más funcional a los intereses nacionales de los países que lo integran. En particular, los gobiernos sudamericanos utilizan al regionalismo tanto como una instancia regional para solucionar conflictos que puedan generar inestabilidad en América del Sur—tales como la crisis en Bolivia en 2008 o la crisis entre Colombia y Ecuador por el “episodio Reyes”— como así también para mejorar su posicionamiento, tanto individual como regional, en el plano estratégico internacional³. Si bien esta mayor cooperación ha derivado en una postura única como bloque en relación a varios episodios y problemáticas, en este ensayo nos limitamos a profundizar sobre la respuesta colectiva de los países sudamericanos en su búsqueda de “afrontar de manera coordinada y concertada el actual escenario internacional signado por la crisis en los principales países desarrollados” (Declaración del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, Buenos Aires, Agosto 12, 2011).

Una red de contención para América del Sur

La estrategia de los países sudamericanos que incorpora la profundización del regionalismo como uno de los pilares fundamentales para enfrentar con instrumen-

² Jorge Castañeda/Marcos Morales: *Leftovers: Tales of the Latin American Left*. London/New York: Routledge, 2008.

³ Jorge Battaglino, “Defence in a Post Hegemonic Regional Agenda: The Case of the South American Defence Council”. En: Riggirozzi, Pía/Tussie, Diana (eds.): *The Rise of Post-hegemonic Regionalism. The Case of Latin America*, Dordrecht: Springer, 2008, pp. 81-100.

tos regionales la crisis desatada en los países industrializados se adelantó al recu-
decido temor a que el sendero de la recu-
peración económica global siguiera los
vaivenes de una “W”, percepción que se
agudizó a partir de la crisis de la deuda
europea en simultáneo con los problemas
políticos en el manejo de la deuda de los
Estados Unidos.

Ahora bien, ¿En qué consisten estos
instrumentos que se articulan en una red
de contención frente a la Gran Recesión?
¿A qué apunta esa red? A partir de estas
preguntas es posible vislumbrar que la
misma posee tres líneas de acción. En pri-
mer lugar, los sudamericanos buscarían
dotar de mayor autonomía al comercio
intrarregional independizándolo progresi-
vamente del uso de divisas en general, y
del dólar estadounidense en particular;
simultáneamente perseguirían una mayor
autonomía para la región en el financia-
miento de proyectos para el desarrollo y;
en tercer lugar, buscarían expandir la pro-
tección y la asistencia, también con un
mayor grado de autonomía, a países de la
región que experimentarían problemas en
sus balanzas de pagos o sufrieran ataques
sobre sus monedas.

La primera línea de acción se encuen-
tra en un estadio más avanzado en compa-
ración con las otras dos, quizás por tratar-
se de temas que vienen trabajándose desde
hace más tiempo. En particular, las herra-
mientas elegidas para lograr una mayor
independencia del dólar en el comercio
intrarregional son: a) el Convenio de
Pagos y Créditos Recíprocos en el marco
de la ALADI, cuya existencia se remonta
a 1966 y al que, a raíz de la crisis, está
intentándose devolver su antiguo brillo
(de acuerdo a la ALADI, en 1989 este con-
venio llegó a canalizar el 90% del comer-
cio intrarregional latinoamericano); b) el
Sistema de Pagos en Moneda Local en el
ámbito del MERCOSUR, que en la actua-

lidad se encuentra en funcionamiento
entre Argentina y Brasil y al que se estu-
dia expandir hacia otros países integrantes
de ese tratado y de la región y; c) el sucre,
una moneda virtual que opera en el marco
del ALBA-TCP y cuya implementación se
encuentra bajo estudio en los países de la
UNASUR. Un aspecto relevante en rela-
ción a estos instrumentos es que, al menos
hasta el momento, cuanto mayor es el
nivel de profundidad y compromiso
requerido para su funcionamiento, menor
es el uso efectivo que se hace de ellos⁴.

Con respecto a la segunda línea de
acción, los países sudamericanos apunta-
rían a lograr una mayor autonomía regio-
nal en el financiamiento de largo plazo
para proyectos de desarrollo a partir del
establecimiento o fortalecimiento de enti-
dades regionales de desarrollo con fondeo
regional. En este sentido, las grandes
apuestas son el lanzamiento del Banco del
Sur, que prestará asistencia crediticia úni-
camente a los países miembros para la eje-
cución de proyectos en el ámbito territo-
rial de la UNASUR; y la Corporación
Andina de Fomento, cuyo fortalecimiento
implicaría tanto un incremento de capital
para potenciar su capacidad de financia-
miento como la adecuación de su política
de préstamos a los nuevos desafíos. El
proyecto original del Banco del Sur idea-
do por el presidente venezolano, Hugo
Chávez, incluía funciones similares al
FMI en el nivel regional. Inicialmente
Brasil se opuso, pero luego de negociacio-
nes se alcanzó un acuerdo para la creación
de una institución con funciones única-
mente de banco de desarrollo, dejando a

⁴ Pablo Trucco: “The Rise of Monetary Agree-
ments in South America”. En: Riggiozzi,
Pía/Tussie, Diana (eds.): *The Rise of Post-
hegemonic Regionalism. The Case of Latin
America*, Dordrecht: Springer, 2008., pp. 101-
124.

otras instituciones regionales la función de socorro en crisis de balanza de pagos.

En particular, la asistencia regional a países con problemas en sus balanzas de pagos quedaría en manos del Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), al cual se estudia expandir. Dicha expansión implicaría tanto el incremento en el número de países miembros como el incremento en las cuotas (o depósitos a plazo) de los Bancos Centrales. Si bien el FLAR es una entidad similar al FMI en cuanto a sus funciones, posee dos claras ventajas sobre este último: por un lado, establece criterios de condicionalidad menos restrictivos (determinados por los países de la región) mientras que, por otro lado, el tiempo de aprobación promedio de los préstamos es más reducido, convirtiéndolo en un instrumento más flexible y utilizable frente emergencias repentinas. Asimismo, se encuentra bajo estudio la creación de un Fondo Regional de Contingencia que podría funcionar como un seguro de reservas y como una fuente adicional de liquidez en casos de emergencia.

El pleno despliegue de esta red de contención representaría un avance muy significativo en la consolidación de la estabilidad y autonomía de América del Sur ante los embates de la crisis global. El subcontinente cuenta con los recursos económicos y la voluntad de sus líderes para seguir avanzando en esta dirección, aunque se trata de iniciativas sujetas a tiempos políticos internos de los países de la región cuyos congresos se muestran con frecuencia más permeables a influencias sectoriales y, en consecuencia, más prudentes ante iniciativas regionales. La decisión política de construir una arquitectura monetaria y financiera regional es simplemente la llave. Abrir la puerta para ingresar a un estadio de mayor estabilidad y autonomía política y económica en el escenario global requiere que la llave gire varias veces

y que en cada vuelta vaya destrabando intereses sectarios, discrepancias políticas e institucionales y divergencias acerca de los fines y los medios de la integración regional. El éxito en esta empresa dependerá de que América del Sur logre sortear las naturales pugnas de intereses en su frente interno así como eventuales mezoquindades entre vecinos, ambas con potencial para erosionar su capacidad de acción y transformación en términos tanto nacionales como regionales.

Reflexiones finales

La contundente victoria de Occidente en la Guerra Fría presagiaba una incontestable hegemonía de los Estados Unidos y Europa occidental en la economía, la política y los valores y paradigmas preponderantes del siglo XXI. Bastaron sólo dos décadas de desregulación económica a escala internacional para que la siempre insaciable voracidad de los capitalistas del sector financiero convirtiera al ensueño de prosperidad de Occidente en una larga y penosa pesadilla. Hoy, la primacía occidental pende de un hilo. Enredados en un entramado político e institucional que constriñe la implementación de acciones políticas capaces de revertir un *statu quo* en decadencia, los líderes políticos del norte industrializado han abdicado de su responsabilidad de conducir el destino de sus naciones en favor de los dogmas del liberalismo económico.

Mientras el norte desarrollado se doblega ante el mercado, la política reina en América del Sur. El espejismo de la ideología neoliberal ha quedado atrás en el sur de América, donde ya no existe respaldo social ni político para la obsecuencia de mercado. En casi todos los países del subcontinente el Estado ha reasumido funciones medulares en la organización

económica y social, devolviendo el destino de las naciones a las manos de la política. En este sentido, la búsqueda de una respuesta regional frente a la crisis internacional constituye en primer lugar una acción política, que apunta al fortalecimiento de la independencia y la estabilidad económica, social y política en el subcontinente.

El viento de popa que impulsa el avance en la nueva fase del regionalismo sudamericano no implica, sin embargo, que el proceso navegue por aguas tranquilas o exentas de borrascas. Diferencias entre los países por cuestiones políticas, económicas o comerciales, así como intereses de sectores sociales dentro de cada país, tienen el potencial de socavar el renovado ímpetu integrador que fortalece a la región frente a las turbulencias externas. El desafío de América del Sur consiste entonces en que sus líderes tengan la visión y la fortaleza política para capitalizar las circunstancias propicias, sortear los obstáculos y sostener el impulso de un proyecto de mediano y largo plazo por encima de intereses coyunturales y conveniencias políticas de corto plazo. En definitiva, la prosperidad de los sudamericanos dependerá de que sus líderes sepan aprovechar la oportunidad y estén a la altura de las circunstancias.

Diana Tussie dirige el Área de Relaciones Internacionales de FLACSO/Argentina y es fundadora y directora de la Red Latinoamericana de Política Comercial (LATN). Con más de veinte años de experiencia en la Argentina, es una reconocida catedrática en temas de economía política internacional. Correo electrónico: dtussie@flacso.org.ar.

Pablo Trucco es investigador adjunto del Área de Relaciones Internacionales de FLACSO/Argentina. Se especializa en temáticas de integración y regionalismo en América del Sur y en cuestiones de economía política internacional. Correo electrónico: ptrucco@flacso.org.ar.

Pablo Alejandro Nacht

América Latina y el Caribe ante la emergencia de China como socio ¿estratégico?

La emergencia de China

En las últimas décadas, la República Popular China (RPC) ha venido ocupando un espacio de relevancia en el orden mundial debido a los resultados de su progresiva reforma económica y su expansión como unidad política en el orden internacional. Esto genera un reacomodamiento de poderes relativos de los actores mundiales y regionales.

Por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe (ALC), el Grupo de Río y delegaciones ministeriales de China se han reunido más de quince veces a partir de 1990. Desde 1997 se han realizado cinco encuentros con funcionarios de alto nivel en las cumbres MERCOSUR-China. El 26 de mayo de 2004 China fue aceptada como observadora permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), estatus que también adquirió con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2009 ingresó como miembro pleno en el Banco Interamericano de Desarrollo, luego de resistir durante varios años a sistemáticos vetos para su ingreso, por parte de EE.UU. y Japón. Éstos son solamente algunos ejemplos de la creciente vinculación entre la región y el gigante asiático.

Otra pieza fundamental para la RPC con ALC es la cuestión de Taiwán, si se tiene en cuenta que, de los 23 países que aún reconocen como Estado a la República de China, doce se encuentran en este continente. Es por ello que China continental ha desplegado una estrategia para convencer –o por lo menos contener la